



ALCALDÍA DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA

IPUT 010-2020

Barrancabermeja, Enero 20 del 2020

CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
SETIC	
FECHA: 21 ENE 2020	HORA: 8:20 A
RECIBIDO POR: Yublis Pinzon	
REGISTRO No: 0020--20	

Doctora
PATRICIA HELENA FIERRO
SECRETARIA DE LAS TIC
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ASUNTO : PUBLICACIÓN RESOLUCION Nro. 001 DE ENERO DEL 2020

Por medio de la presente estamos solicitando a usted sea publicado en la página de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, la Resolución Nro. 001 de Enero del 2020, la cual anexamos a la presente. Así mismo allegamos el aviso notificadorio, el cual se inició el 13 de Enero de 2020, el que igualmente debe ser publicado.

Atentamente,

FERNANDO PEDRAZA MARTINEZ
Inspector de Policía Urbano Tercero
Comunas 5 y 6 de Barrancabermeja

	NOMBRE FUNCIONARIO	FECHA	FIRMA
Proyectó	FERNANDFO PEDRAZA - INSPECTOR	ENERO 20 DE 2020	
Elaboró	XIOMARA GALVIS - TECNICO	ENERO 20 DE 2020	

Calle 48 Nro. 21 A 15 Barrio Colombia
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL – CAM
Inspección de Policía Urbana Tercera Comunas 5 y 6

www.barrancabermeja.gov.co

Palacio Municipal | Cra. 5 # 50 - 43 Barrancabermeja, Santander, Colombia



Alcaldía de
Barrancabermeja



**INSPECCION MUNICIPAL DE POLICIA URBANA TERCERA
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
RESOLUCIÓN Nro. 001 DE ENERO DEL 2020**

POR MEDIO DE LA CUAL SE DISPONE SOBRE LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DE LA INSPECCION DE POLICIA URBANA TERCERA DE BARRANCABERMEJA EN EL PROCESO RADICADO 047 DE 2017.

EL INSPECTOR DE POLICÍA URBANO TERCERO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, en uso de sus facultades legales y constitucionales, como las que se confirieron en el decreto municipal 061 de 2006, el 272 del 29 de agosto de 2008, el 094 del 18 de mayo de 2004, las disposiciones legales que los modificaron o derogaron, las contempladas en otras normativas jurídicas Municipales y Departamentales, así como las establecidas en la ley 1437 de 2011 y en la Constitución Política Colombiana, y

ANTECEDENTES

El día 15 de septiembre de 2017 se recibió en este Despacho oficio que remitiera la inspección de ornato y espacio público en el cual da a conocer escrito anexo en el que relata la secretaria de gobierno que el señor JUAN FELIPE RENDON ALVAREZ solicita que se realicen las gestiones necesarias para dar cumplimiento al amparo policivo (fls. 2)

Anexo a dichos oficios obra escrito suscrito por JUAN FELIPE RENDON quien en calidad de apoderado de la empresa INTERCONEXION ELECTRICA S.A.E.S.P relata; *"el día 7 de mayo de 2015 presenté solicitud de Amparo Policivo en la Inspección Cuarta de Policía de Barrancabermeja, con el fin de que por medio de este trámite, cese la perturbación que actualmente se presenta en la franja de servidumbre de la cual es titular mi representada en el Barrio San Martín"*(fl. 3-4)

Con ocasión a la novedad allega a este Despacho, se resolvió la práctica de visita el día 5 de octubre de 2017 obrando dicha acta en el plenario" (fl. 5-9)

Por su parte, la electrificadora de Santander le envió a la alcaldía de Barrancabermeja, escrito en el que informó lo siguiente, *"mediante la presente comunicación, le informamos que en el predio ubicado en el Barrio El Danubio frente a la casa del Adulto Mayor, ha invadido el corredor de seguridad con la línea 473 San Silvestre- Buenavista a nivel de tensión de 115 [KV], violando normas de seguridad contempladas en el RETIE"*(fl.11-17)

Siguiendo la cuerda procesal, el señor inspector de este Despacho, el día 25 de octubre de 2017, requirió a la oficina asesora de planeación municipal para que liblara informe técnico y conceptual. En respuesta a dicha solicitud el día 14 de noviembre del mismo año se recibió informe que relata; *"se pudo evidenciar que existen varias construcciones por debajo de las redes eléctricas, situación que está violando los márgenes de seguridad contemplados en el RETIE, constituyendo un riesgo inminente para los habitantes de la vivienda y transeúntes del sector, así mismo, se pudo constatar que los propietarios de las mencionadas viviendas, no cumplen con los mínimos requeridos de la norma Sismoresistente NSR-10, como e ilustra en el registro fotográfico"*(fl.18-20)

El 31 de octubre de 2017 se recibió de parte del apoderado de INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA, en el que manifestó; *"por medio del presente solicito de manera respetuosa se dé trámite a la querella de amparo policivo de la referencia"* (fl. 22-23)



Alcaldía de
Barrancabermeja



En este orden, el suscrito inspector en aras de contar con más claridad frente a los hechos relatados por el quejoso, dispuso practicar visita al lugar de los hechos hallando que las personas que habitan en dicha zona están instalados hace más de cinco años lo que a los ojos de este servidor permite que se configure el derecho a la confianza legítima.

Como evidencia de la longevidad de la instalación para cada caso particular tenemos lo siguiente; para el caso de la señora MARIA DEL TRANSITO HERREÑO, obra en el plenario certificado suscrito por los vecinos, contrato de compraventa de fecha 18 de agosto de 2017 y reconocimiento residencial de la junta de acción comunal en el que precisa la vicepresidenta que los señores LUIS HERNANDO LOPEZ Y MARIA DEL TRANSITO HERREÑO DE SAN MARTIN residen en el domicilio TRANSVERSAL 49 – DIAGONAL 56 BARRIO BRISAS DE SAN MARTIN hace más de 5 años.

Así mismo, se otea que la señora FANNY ESTHER CADENA SUAREZ quien reside en la TRANSVERSAL 49 –DIAGONAL 56 BARRIO BRISAS DE SAN MARTIN LOTE 17, cuenta con más de 10 años de estar instalada en dicho domicilio y dan cuenta de ello el reconocimiento residencial de la J.A.C., declaración juramentada y certificado de los demás habitantes del sector.

Por su parte la señora YULIET SOLER BERMUDEZ está instalada en la Diagonal 56b-44 N 50 56 desde marzo de 2012 lo que se puede constatar con certificado de la junta de acción comunal de fecha 14 de diciembre de 2019, escritura No. 203 y contrato de compraventa de fecha 3 de marzo de 2016, documentos que reposan en el plenario.

Igualmente, la señora HEIDY MOSQUERA PLATA, habita en la transversal 49 -56 barrio brisas de san Martin desde hace 6 años tal y como lo hace constar reconocimiento residencial, certificación de testigos y contrato de compraventa en el que figura la señora MOSQUERA como compradora.

Finalmente, la señora LEDYS PAOLA PRADA PEÑUELA quien habita en el asentamiento humano que colinda entre el barrio Danubio y el barrio Brisas de San Martín acredita que su instalación en dicho lugar es de más de seis años y prueba tal aseveración con certificado de reconocimiento residencial y declaraciones de los fundadores de asentamiento humano, documentos que obran en el diligenciamiento.

CONSIDERANDO

Así las cosas, y observando el trasegar procesal antes Descrito el Despacho entró a valorar las condiciones de hecho y de derecho que envisten al caso de marras, encontrando que en el plenario obran pruebas que permiten vislumbrar los actos de señor y dueño que han venido desplegando los señores LEDYS PAOLA PRADA PEÑUELA, HEIDY MOSQUERA PLATA, YULIET SOLER BERMUDEZ, FANNY ESTHER CADENA SUAREZ, LUIS HERNANDO LOPEZ Y MARIA DEL TRANSITO HERREÑO DE SAN MARTIN sobre el asentamiento hoy objeto de la queja por presunta perturbación urbanística y ocupación de espacio público.

Otea el suscrito servidor, que reposan en el diligenciamiento pruebas de que los presuntos contraventores cuentan con suficiente material probatorio que acreditan su instalación hace más de 5 años y en algunos casos hace más de 10 años.



Alcaldía de
Barrancabermeja

Por lo anterior tenemos que los actos descritos en líneas anteriores dan cuenta de una instalación desde hace muchos años siendo clara la omisión de las autoridades administrativas, lo cual permitió que se configurara una presunta confianza legítima por lo que la demolición de dichas mejoras implicaría una directa y significativa afectación moral, social, económica y de vida en relación para los querellados, pues estaríamos ante una gran vulneración a su derecho constitucional a la vivienda digna.

Frente a tal particular el suscrito se permite citar apartes de sendos pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional en los cuales se ha pronunciado sobre casos análogos al de la presente litis.

Sentencia T-437-12

(...) 5.3. En conclusión, es deber del Estado velar por la preservación del espacio público. Sin embargo, las medidas que se tomen para la protección del mismo, no deben ser desproporcionadas frente a la afectación de los intereses de terceros, al punto que estos no tengan posibilidad alguna de sustento. Así, la Administración tiene el deber de desarrollar políticas encaminadas a la preservación del interés general que minimicen el daño que puede sufrir la población afectada. Dichas medidas deben ser razonables, no deben ser infundadas o arbitrarias y, por el contrario deben ser proporcionadas respecto de los fines que las motiven.(...)

(...)Adicional a la protección a las expectativas razonables, ciertas y fundadas, la confianza legítima es, también, un mecanismo que busca conciliar los conflictos entre los intereses públicos y privados, y un límite a las actuaciones de la Administración que busca proteger el interés general^[40] y el principio democrático.^[41] Por tanto, en virtud del principio de la confianza legítima como mecanismo conciliador, las actuaciones de la Administración que generen un cambio súbito de las condiciones que regulan las relaciones con los administrados en donde existe una expectativa justificada, deben ser precedidas por un período de transición, en el cual se le brinde a los particulares el tiempo y los medios necesarios para que éstos se ajusten a la nueva situación jurídica y puedan reequilibrar su posición.^[42] De manera que las expectativas válidas que éstos tenían, generadas por las actuaciones de la Administración, ya sea por acciones u omisiones, por normas o por interpretaciones jurídicas, sean protegidas. No obstante, esas medidas que se tomen para minimizar las repercusiones, no son equivalentes a una indemnización o reparación o a un desconocimiento del interés general.^[43](...)

Así mismo, en la sentencia T-200 de 2009, esta Corte estudió la acción de tutela interpuesta por una señora de setenta años de edad, a la cual se desalojó del predio en el cual habitó durante ocho años por encontrarse en espacio público. Al respecto indicó:

"Conforme a lo expuesto, considera la Sala que la decisión adoptada por la autoridad demandada desconoce abiertamente el principio de confianza legítima del que es titular el accionante, pues si bien, la administración tiene la obligación constitucional de velar por la protección de la integral (sic) del espacio público, a fin de garantizar el acceso a todos los ciudadanos al goce y utilización común de tales espacios colectivos, el Estado debe buscar que la preservación del interés colectivo no obligue a los administrados que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, atendiendo a sus condiciones físicas y económicas, a soportar una carga indebida y desproporcionada. En este sentido, las medidas de desalojo del espacio público deben estar



Alcaldía de
Barrancabermeja



precedidas por un cuidadoso estudio y evaluación de las condiciones y características de la realidad social de cada caso particular.

(...)

Así las cosas, la Sala considera que, como quiera que la entidad demandada no adoptó alguna medida alternativa para la preservación del principio de confianza legítima y la salvaguarda de los derechos fundamentales del actor, le corresponde a la administración local, acompañar al accionante, a fin de verificar su situación personal, familiar, social y económica, con el objetivo de establecer e implementar el tipo de programa estatal resulta [que] aplicable a su caso, ya sea a través de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas municipales competentes, atendiendo a que el acto administrativo de desalojo lesiona desproporcionadamente los intereses de la accionante y constituye una medida regresiva."

De la relación fáctica descrita, tenemos que el predio hoy objeto de la litis es claramente un bien de uso público lo que lo hace inalienable, inembargable e imprescriptible, por lo cual pese a las condiciones que reúnen la instalación de los querellados, no podría operar a su favor una prescripción adquisitiva de dominio, empero, esto no implica que se desconozcan los derechos que con el paso de los años y la ya mencionada instalación pacífica se han adquirido, por lo cual este Despacho si bien no desconoce la clara perturbación al espacio público por la construcción y/u ocupación, no puede resolver de fondo el sub lite obviando los derechos de los querellados los cuales encuentra el suscrito rayan en rango de constitucionalidad, mismos que en atención a su jerarquía normativa habrán de primar.

Así las cosas, las autoridades encargadas de procurar la preservación del interés general, deben en su ejercicio velar por minimizar los daños que eventualmente se cause a los habitantes afectados con las órdenes de desalojo, por lo cual se deberá gestionar programas y políticas especiales de atención a la población que, sufriendo de condiciones como la pobreza y a falta de opción distinta, se ve obligada a utilizar el espacio colectivo, único a su alcance.

Ratifica la Corte esta constante y vinculante postura, en el siguiente pronunciamiento-Corte Constitucional, Sentencia T-772 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).

*5.3. En providencias posteriores, la Corte desarrolló más a profundidad las características de ese plan adecuado y razonable al afirmar que "(...) tales políticas, programas y medidas (i) se han de adelantar siguiendo el debido proceso y dándole a los afectados un trato digno, (ii) deben respetar la confianza legítima de los afectados, (iii) deben estar precedidas de una cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, con el seguimiento y la actualización necesarios para guardar correspondencia en su alcance y características con dicha realidad, con miras a asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales, y (iv) **no se pueden adelantar en forma tal que se lesione desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población, ni de manera tal que se prive a quienes no cuentan con oportunidades económicas en el sector formal de los únicos medios lícitos de subsistencia que tienen a su disposición.** (negritas propias)*



Alcaldía de
Barrancabermeja



Igualmente, no podemos desconocer las sentencias de la corte constitucional que son vinculantes y a más de lo anterior nos recuerdan la protección especial como es el caso de marrras de vendedores del espacio público, referidas a la confianza legítima de estos ciudadanos, confianza que al igual que aplica a vendedores ambulantes, aplica como es sabido a las familias por cuanto se respeta transitoriamente un derecho fundamental como lo es la vivienda digna.

Sentencia T-642/04[2]: “Esta Corporación, en repetidas ocasiones, ha acudido al principio de la confianza legítima cuando se trata de un conflicto que involucra decisiones sorpresivas de la administración, las que, en atención al postulado de la buen fe, no fueron previstas por el ciudadano. La Corte ha definido este principio en los siguientes términos:

*‘Es éste un principio que debe permear el derecho administrativo, el cual, si bien se deriva directamente de los principios de seguridad jurídica (art. 1° y 4° de la C.P.), de respeto al acto propio (Sentencia T-295/99) y buena fe (art. 83 de la C.P.), adquiere una identidad propia en virtud de las especiales reglas que se imponen en la relación entre administración y administrado. Es por ello que la confianza en la administración no sólo es éticamente deseable sino jurídicamente exigible. **Este principio se aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses público y privado, cuando la administración ha creado expectativas favorables para el administrado** y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones. Por lo tanto, la confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la administración, es digna de protección y debe respetarse (Sentencia T-660 de 2002).(negritas propias)*

Es así que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte, tiene tres presupuestos básicos la reseñada confianza legítima: (i) la necesidad de preservar de manera perentoria el interés público; (ii) una desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y los administrados; y (iii) la necesidad de adoptar medidas por un periodo transitorio que adecuen la actual situación a la nueva realidad[3].

Así entonces, en consideración a los principios de confianza legítima y buena fe, las autoridades y los particulares deben ser coherentes en sus actuaciones y respetar los compromisos adquiridos en sus acuerdos y convenios; deben garantizar estabilidad y durabilidad de las situaciones generadas, de tal suerte que “así como la administración pública no puede ejercer sus potestades defraudando la confianza debida a quienes con ella se relacionan, tampoco el administrado puede actuar en contra de aquellas exigencias éticas[4]”

Finalmente, dado que la instalación respecto de la cual se ruega desalojo es la vivienda de los querellados y en vista de la conexidad que hay entre sus condiciones de vivienda y la vida digna, se analiza las precisiones que frente a este particular ha hecho la corte constitucional.



Alcaldía de
Barrancabermeja



7.1. El derecho a la vivienda digna reconocido, en el artículo 51^[60] de la Constitución Política, está catalogado como un derecho económico y social de naturaleza prestacional. El mismo ha sido definido^[61] como el derecho dirigido a satisfacer la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda, sea propio o ajeno, que cuente con condiciones suficientes para que quienes allí habiten puedan realizar de manera digna su proyecto de vida.

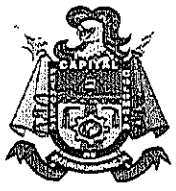
7.2. Al ser considerado un derecho prestacional se ha establecido que debe ser desarrollado en forma progresiva por las instancias del poder facultadas para ello, en observancia del principio democrático y de conformidad con las condiciones económicas, sociales y jurídicas del momento determinado. En ese sentido, se ha dicho que no le corresponde al juez de tutela intervenir en el desarrollo del derecho, considerando que dicha labor le corresponde al Legislador y a la Administración atendiendo a las posibilidades fiscales y de gestión; por lo cual, la jurisprudencia constitucional^[62] estableció que en principio no procedía su protección por vía de tutela.

7.3. No obstante, esta posición inicial ha sido matizada en atención a las particularidades de los casos concretos, como pasa a indicarse.

En un comienzo, se estableció que al ser un derecho económico, social y cultural, su protección no procedía por vía de tutela salvo que la situación fáctica pusiera en riesgo otro derecho fundamental que requiriera de la protección del derecho a la vivienda digna. En dichos casos se consideraba que la vulneración del derecho a la vivienda que pusiera en riesgo derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la igualdad o el debido proceso, daban lugar a la intervención del juez de tutela, acudiendo al criterio de conexidad.

Ello llevó a que se protegiera por vía de tutela el derecho a la vivienda digna cuando había indebida ejecución de la obra o defectos y fallas en un inmueble que llevaran al juez a concluir que había un comportamiento negligente de la Administración, ya fuera por indebida ejecución de las viviendas de interés social o de una obra pública, que ponía en riesgo el derecho a la vida de los accionantes y que por tanto ameritaba la protección del juez de tutela.^[63]

Sin embargo, la Corte ha reconocido otras situaciones, en las cuales el mecanismo procedía: (i) cuando se evidenciara que había una posible vulneración al derecho al mínimo vital de personas en situación de debilidad manifiesta^[64]; (ii) cuando el contenido del derecho estuviera determinado, y por tanto hubiera adquirido el carácter de fundamental, de acuerdo a la teoría de la transmutación^[65]; o (iii) cuando por medio de otros principios democráticos que hacen parte de nuestra Carta Política, se llega a la convicción de que la tutela es necesaria para proteger el derecho a la vivienda^[66]. Dichas hipótesis fueron ampliamente debatidas, hasta que se dio el paso al siguiente momento histórico en el desarrollo jurisprudencial de este derecho.



Alcaldía de
Barrancabermeja



7.4. Finalmente, por medio de las sentencias T-585 de 2008 y C-299 de 2011^[67], se reconoció que el derecho a la vivienda digna es fundamental, pues no sólo tiene una relación estrecha con la dignidad humana, sino que además ha de ser considerado como un fin a alcanzar en el Estado Social de Derecho, en concordancia con tratados que ha firmado Colombia que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad^[68]. Sin embargo, su protección por vía de tutela ha de estar condicionado al desarrollo que del mismo hagan los poderes democráticos constituidos para tal fin, atendiendo al mandato de progresividad.

7.5. De esta manera, se estableció que, “como valor constitucional la dignidad humana en materia de vivienda supone proveer espacios mínimos, calidad de la construcción, acceso a servicios públicos, áreas para recreación, vías de acceso y, en general, ambientes adecuados para la convivencia de las personas; al mismo tiempo, la Administración, según sus posibilidades fiscales y competencias jurídicas, debe generar sistemas económicos que permitan la adquisición de vivienda acorde con el ingreso de la población y propender por una oferta adecuada, con énfasis en los grupos de mayor vulnerabilidad.”^[69]

7.6. Teniendo en cuenta lo expuesto, es posible entonces identificar tres supuestos en los cuales procede el amparo por vía de tutela, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el párrafo precedente: (i) cuando esté de por medio la faceta de no perturbación, o el derecho de defensa de la vivienda digna, es decir “la obligación estatal de no perturbar el goce del derecho injustificadamente, y de proteger a las personas contra injerencias indebidas de terceros en el goce del derecho a la vivienda, es exigible ante el juez de tutela de forma inmediata”^[70]; (ii) cuando haya un reclamo relativo al respeto de un derecho subjetivo adquirido según el desarrollo legal y reglamentario del tema y, (iii) por último, cuando debido a la situación de debilidad manifiesta del accionante la posible vulneración al derecho a la vivienda digna ponga en riesgo su dignidad.

7.7. Adicionalmente, la Corte estableció en la sentencia T-573 de 2010^[71], que el derecho a la vivienda digna se protege para evitar una injusta privación o afectación de la vivienda, aunque no siempre con miras a obtener una prestación económica tendiente a asegurar el disfrute de la misma. Por ello, se determinó que la situación fáctica debe cumplir con una de dos condiciones: el acto que se dice lesivo del derecho debe ser injusto, ilícito o ilegítimo, o si es un acto legítimo la ponderación de los beneficios con el detrimento que ocasione debe resultar manifiestamente desproporcionado.

Corolario a lo anterior, tenemos que los postulados de la confianza legítima y la vida digna están dados en favor de los querellados en el presente asunto, por lo cual y en razón a lo vinculante de los pronunciamientos citados, habrá este Despacho de resolver este proveído en atención a los mismos, los cuales se tienen demostrados en el tiempo por parte de los señores LEDYS PAOLA PRADA PEÑUELA, HEIDY MOSQUERA PLATA, YULIET SOLER BERMUDEZ, FANNY ESTHER CADENA SUAREZ, LUIS HERNANDO LOPEZ Y MARIA DEL TRANSITO HERREÑO DE SAN



Alcaldía de
Barrancabermeja



MARTIN. Amén de lo anterior el Despacho pudo evidenciar indiscutiblemente que entre los aquí querellados hay persona adultos mayores, así como niñas y niños, al igual que madres cabeza de familia, a quienes constitucionalmente, como es sabido, se le debe dar un tratamiento particular y concreto por ser personas de especial protección constitucional.

Que en mérito de lo expuesto la Inspección de Policía Urbana Tercera del Municipio de Barrancabermeja

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Suspender la facultad sancionatoria de la Inspección Municipal De Policía Urbana Tercera de Barrancabermeja, hasta tanto la administración desarrolle programas especiales de atención a los querellados quienes en sus condiciones reseñadas precedentemente deben ser tratados bajo las preceptivas constitucionales indicadas en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a los señores LEDYS PAOLA PRADA PEÑUELA, HEIDY MOSQUERA PLATA, YULIET SOLER BERMUDEZ, FANNY ESTHER CADENA SUAREZ, LUIS HERNANDO LOPEZ Y MARIA DEL TRANSITO HERREÑO DE SAN MARTIN abstenerse en delante de ocupar nuevo espacio público del ya documentado y reconocido en este proceso, dirigido contra los mismos.

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente decisión al quejoso y al querellado, esto es, al Doctor JUAN FELIPE RENDONÁLVAREZ portador de la T.P N 105.448 del C.S.J. en calidad de apoderado de la empresa INTERCONEXION ELECTRICA S.A.E.S.P, o quien haga sus veces, y a LEDYS PAOLA PRADA PEÑUELA, HEIDY MOSQUERA PLATA, YULIET SOLER BERMUDEZ, FANNY ESTHER CADENA SUAREZ, LUIS HERNANDO LOPEZ Y MARIA DEL TRANSITO HERREÑO DE SAN MARTIN.

ARTICULO QUINTO: Notificar la presente determinación al Ministerio Público, personera delegada en lo penal y policivo, Dra. SILVIA PATRICIA LEÓN.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución por ser acto administrativo definitivo proceden los recursos de ley 1437 de 2011 los cuales el de apelación se surte ante la Secretaría de Gobierno de Barrancabermeja dentro de los diez días siguientes a la notificación personal o por aviso según el caso en los términos que establece la ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en Barrancabermeja a los diez (10) días de enero de 2020.

	Nombre del Funcionario	Firma .	Fecha
Proyectó	Leidy Yoanna Serpa Lázaro		10/01/2020
Revisó	Fernando Pedraza Martínez.		10/01/2020
Aprobó	Fernando Pedraza Martínez.		10/01/2020
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

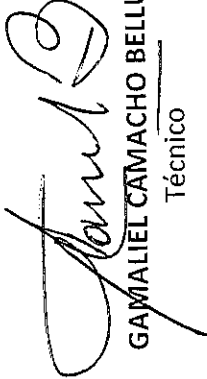
FERNANDO PEDRAZA MARTINEZ
Inspector.

AVISO

LA INSPECCIÓN TERCERA DE POLICIA URBANA DE BARRANCABERMEJA

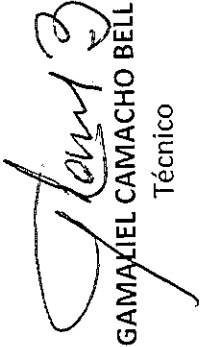
CLASE DE PROCESO	QUERELANTE	QUERELLADO	RADICADO Nro.	ASUNTO
PROCESO VERBAL ABREVIADO POR COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA POSESION ART. 78 (Ley 1801 de 2016)	INTERCONEXION ELECTRICA S.A E.S.P, (APODERADO DR. JUAN FELIPE RENDON ALVAREZ)	LEDYS PAOLA PRADA PEÑUELA Y OTROS.	047 DE 2017	NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN Nro. 001 DE ENERO DEL 2020

En consecuencia se fija a las 7:00 a.m del día trece (13) de enero de 2020.

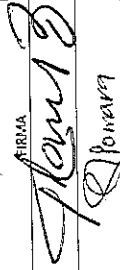



GAMALIEL CAMACHO BELLUCI
Técnico

NOTA DE DESFIJACION: El presente se desfija hoy diecisiete (17) de Enero de dos mil veinte (2020) siendo las 5 p.m. Advirtiéndose que la presente notificación se considerará surtida al finalizar el día 20 de Enero del dosmil veinte (2020).



GAMALIEL CAMACHO BELLUCI
Técnico

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó	GAMALIEL CAMACHO - Técnico		Enero 13 de 2020
Elaboró:	XIOMARA GALVIS- Técnico		Enero 13 de 2020